



Acuerdo 1/2009, de 30 de julio, del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en relación con la previsión de la disposición adicional sexta del Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el cual se crea un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y la Ocupación, y se aprueban créditos extraordinarios para atender la financiación.

El artículo 54.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público (de ahora en adelante LCSP), que lleva por título "exigencia de clasificación", incrementa, respecto a los contratos de obras licitados por aquellos entes que tengan la condición de administración pública, la cuantía a partir de la cual será exigible la clasificación empresarial. En concreto, la cuantía para este tipo de contratos se establece en 350.000 euros.

Sin embargo, la disposición transitoria quinta de la LCSP, textualmente, establece que: *"El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas"*.

Con ocasión de las dudas planteadas en la aplicación efectiva de la disposición transitoria mencionada y con la finalidad de dar unos criterios interpretativos que faciliten su aplicación, el Pleno de esta Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en sesión de 20 de junio de 2008, a propuesta de esta Comisión de Clasificación empresarial, aprobó el Acuerdo 1/2008, sobre el régimen transitorio aplicable a la clasificación empresarial recogido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Específicamente, el apartado primero de este Acuerdo determina lo siguiente:

*"En tanto no entre en vigor la norma reglamentaria que desarrolle los correspondientes preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público, los límites cuantitativos de los contratos a partir de los cuales se tiene que exigir la clasificación empresarial, tanto en contratos de obras como de servicios a partir del momento de la entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, continúan siendo los recogidos en el artículo 25.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, **120.202,42 €, IVA incluido**".*

Recientemente, el Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, establece en la Disposición adicional sexta que: "A partir de la entrada en vigor de este Real decreto ley, no es exigible la clasificación en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros".

A la vista del contenido de esta última disposición y en la medida en que esta regulación se establece en la parte final de la norma y no en su articulado, se puede considerar que se trata de una disposición aplicable a todos los contratos de obras y no únicamente a aquellos contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del Real decreto ley. Según esto, la disposición adicional sexta comporta, de hecho, una derogación parcial del régimen transitorio de la clasificación empresarial previsto en la disposición transitoria quinta de la LCSP, respecto a los contratos de obras.



Por tanto, y respecto a los contratos de obras, el umbral de exigencia de clasificación empresarial dejaría de ser la cifra recogida en el artículo 25.1 del Texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, es decir, 120.202,42 euros, IVA incluido, para pasar a ser la recogida en la misma disposición adicional sexta del Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, es decir, 350.000 euros, que es, precisamente, la cifra prevista para los contratos de obras en el apartado 1 del artículo 54 de la LCSP. En definitiva, resultaría de aplicación en este caso el régimen general previsto en la LCSP.

Adicionalmente, se tiene que determinar cuál es el importe que se tiene que tomar en consideración para exigir la clasificación empresarial correspondiente, dado que la disposición adicional sexta del Real decreto ley 9/2008 no hace ninguna referencia a si la cifra que figura tiene que ser considerada con IVA incluido o sin IVA. En relación con la cuestión planteada y sobre la base que esta disposición adicional no tiene que alterar el régimen jurídico de la clasificación empresarial, sino que se tiene que entender que afecta únicamente a su régimen de aplicación transitorio, se tendría que interpretar que la cifra de 350.000 euros tiene que ser considerada IVA excluido.

A la vista de lo que se ha expuesto, respecto a la publicación y entrada en vigor de la disposición adicional sexta del Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, y al régimen transitorio de la clasificación empresarial recogido en la disposición transitoria quinta de la LCSP, a propuesta de la Comisión de Clasificación empresarial, este Pleno

A C U E R D A

En aplicación de la disposición adicional sexta del Real decreto ley 9/2008, de 28 de noviembre, por el que se crean un Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo y se aprueban créditos extraordinarios para atender a su financiación, desde el 3 de diciembre de 2008, fecha de entrada en vigor del mencionado Real decreto ley, no es exigible la clasificación empresarial en los contratos de obras de valor inferior a 350.000 euros, entendiendo como tal el importe correspondiente al presupuesto de licitación del contrato, IVA excluido.

Barcelona, 30 de julio de 2009.